

—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—  
M. Zavala.—José García Ramírez.—En-  
rique Lanza, secretario.

Es copia. México, Diciembre 9 de 1873.

—Lic Emilio Ordaz, oficial mayor interino.

## COMPETENCIA.

*Promovida por el Juez 3º de lo civil de México al de 1ª instancia del Canton de Veracruz, para conocer de la demanda que D. Francisco Prida ha entablado contra la empresa del Ferrocarril, en la estacion situada en dicha ciudad.*

### PEDIMENTO DEL FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El Fiscal dice: que D. Francisco Prida se presentó ante el Juzgado de 1ª instancia del Canton de Veracruz, demandando en conciliacion al superintendente que en esa estacion tiene la empresa del Ferrocarril, la cantidad de cuatro mil pesos, como indemnizacion de daños y perjuicios por no haber querido dicho superintendente se trasportara la carga que el expresado Prida había entregado para su conduccion á esta Capital. El superintendente D. Alonso Ridley, no concurrió á la conciliacion, y habiendo sido citado para el juicio, contestó: que habiendo comunicado á la Direccion la cita, la empresa le había manifestado que no siendo el superintendente Ridley apoderado de la empresa, y teniendo el legítimo representante su domicilio en la Capital, no debía aquel empleado contestar á la demanda de Prida.

En este punto el negocio, y á solicitud del Lic. D. Emilio Pardo por D. D. G. B. Crowley, encargado de la exportacion del Ferrocarril Mexicano, el Juzgado 3º de lo civil libró exhorto al de 1ª instancia de Veracruz, para que se abstuviera de conocer de la demanda intentada por Prida, y en

caso de no acceder, diera por promovida la correspondiente competencia. El Juez requerido no se conformó con las razones del requerente y ambos han remitido sus actuaciones á esa Suprema Corte, á fin de que dirima el conflicto jurisdiccional que ha surgido. El Fiscal al examinar la presente cuestion, se inclina á las razones del Juez de 1ª instancia de Veracruz, por mas que el de México, ó mejor dicho la parte que sostiene la jurisdiccion de este Juez, quiera ver en los empleados de Veracruz, unos meros factores en la rigidez que el derecho mercantil dá á esa palabra.

El principio de derecho que enseña: *distingue tiempos y concorda los derechos*, no debe perderse nunca de vista al tratar ciertas cuestiones jurídicas. En efecto, esos factores de que hablan nuestros antiguos Códigos tomando sus doctrinas del derecho Romano, no son estrictamente lo que son hoy ciertos empleados de las negociaciones mercantiles. Antiguamente el comercio, circunscrito á las operaciones que se conocian en la época en que aquellos Códigos se promulgaron, no había tomado las proporciones colosales que hoy tiene: sobre todo, las empresas nunca tuvieron la inmensa importancia comercial que tienen, y la órbita inmensa en que giran. Así hoy día se ven empresas que teniendo la casa matriz en un continente, tiene sus sucursales en otros. Como otras que establecida la casa principal en México, tienen sus casas secundarias estendidas en muchas poblaciones y capitales de la República. Y sin embargo de que todos los empleados en esas casas contratan, comercian y gestionan en nombre de la casa matriz y para su provecho, las demandas sobre cumplimiento de contrato hecho por alguno de ellos, no se llevan á la casa principal, sino ante el Juez donde esté situada la casa que directamente contrató.

Discurrir de otra manera, equivaldría á que un habitante de México, que trata y contrata con cualesquiera de las muchas secundarias que hay en México, pero la prin-

cipal en Paris, Roma ó Alemania, se le obligara á llevar allá su demanda. Lo mismo sucedería en menor escala con obligar al morador de esta Capital, que contrata con una casa sucursal de otra situada en Durango, Chihuahua ó Tamaulipas, se le obligara á acudir á esos puntos á reclamar lo que se le deba en virtud del contrato celebrado con las casas sucursales. Por otra parte, que eso sería la mayor de las injusticias.

La casa principal adquiere y se aprovecha de sus contratos en cualquiera lugar en que tiene su sucursal; y á la hora de exigirle el cumplimiento de una obligacion, la sucursal no tiene facultades y se invoca el domicilio. En lo favorable tiene personalidad, donde quiera que tiene su agente; en lo adverso solo puede ser obligada en un solo lugar. La razon natural rechaza semejante proceder. Los contratos que la empresa celebra, son de buena fé igualmente obligatorios para ella y para los individuos que con ella contratan; y en semejantes contratos, una perfecta igualdad en los derechos y obligaciones es lo que los caracteriza.

El verdadero carácter legal que tiene el superintendente de la estacion del camino de fierro situado en Veracruz, es la de un mero representante, no con el carácter de factor, ó dependiente, ó manco, sino de un sustituto de la empresa; ó en otros términos, la empresa misma representada en la persona de su superintendente. No es el factor que contrata para su dueño, y que las leyes aunque como representante de su principal, siempre lo considera como dependiente, sino la empresa misma, el dueño en persona, que está contratando. Y la razon de esto es que á la empresa solo se la considera con una personalidad moral que la hace estar presente en cualesquiera de los puntos del trayecto de la vía férrea en que tenga sus empleados. Esto se deriva de la naturaleza misma de la concesion. Las garantías, los privilegios, las concesiones que el Supremo Gobierno le hizo, todos esos derechos, los conserva la empresa lo mismo aquí, que en

Puebla, que en Orizaba ó Veracruz; la persona moral está representada en todos esos puntos.

Se dice que el superintendente de Veracruz ni es apoderado judicial para contestar este pleito, y que por lo mismo, no tiene personalidad; pero al asentar esta proposicion se incurre en una equivocacion. Se necesita del poder judicial cuando una persona extraña y diferente del litigante vá á presentarse en juicio; mas no cuando el litigante mismo se vá á presentar; y segun se ha manifestado, por el carácter mismo de la empresa, ella en la persona de su superintendente ha sido demandada, y este tiene que contestar ese juicio por sí ó por apoderado si quiere.

Partiendo de este principio, se debe entonces para decidir la presente controversia fijar la atencion en la ley 32, tít. 2º Part. 3ª, que consignando los diversos modos con los que un Juez puede tener jurisdiccion para conocer de un negocio, dice en el verso "La Sesta," que es Juez competente el del lugar donde se celebró el contrato; y los autores esplayando el espíritu de esa disposicion, enseñan que porque acaso la consideracion del lugar fué la que inclinó al contrayente á contestar. Se enseña tambien conforme á ese espíritu, que es necesario que el demandado se encuentre en el lugar donde se le demanda; pues bien, en el presente caso, el demandado está presente en Veracruz, lugar del contrato, ó lo que es lo mismo donde ha sufrido la obligacion cuyo cumplimiento ha dado origen á la demanda de Prida.

El Fiscal no se cree en el deber de discutir las diversas disposiciones que cada uno de los litigantes alega para defender la jurisdiccion del respectivo Juez, y cuyas disposiciones las toman, la una del Código de procedimientos de Veracruz, y la otra del Código de procedimientos del Distrito federal, porque tratándose de diversos territorios, hay que elevarse á las leyes generales y comunes que les son obligatorias á todas

las autoridades y habitantes de la República.

Por lo expuesto, el Fiscal haciendo suyo tambien lo alegado en apoyo de su jurisdiccion por el Juez de 1ª instancia del Canton de Veracruz, pide á esa Sala se sirva declarar. Unica: el Juez de 1ª instancia de Veracruz, es el competente para conocer de la demanda que D. Francisco Prida ha intentado en dicha Ciudad contra el superintendente de la estacion del Ferrocarril, situada en aquella poblacion, Alonso Ridley, sobre cobro de daños y perjuicios, por no haberle trasportado una cantidad de efectos.

México, 23 de Octubre de 1873.—*Altamirano.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre 13 de 1873.—Vistos los autos de competencia promovida por el Juez 3º de lo civil de México al de 1ª instancia del Canton de Veracruz, para conocer de la demanda que D. Francisco Prida ha entablado contra la empresa del Ferrocarril en la estacion situada en dicha Ciudad. Visto lo pedido ante esta 1ª Sala por el Sr. Fiscal en favor de la jurisdiccion del Juez de Veracruz; oido lo alegado al tiempo de la vista por el Lic. Emilio Pardo, como patrono de la empresa y en apoyo de la autoridad del Juzgado 3º de México, y el informe del Lic. Agustin Arévalo, como abogado del C. Prida, sosteniendo la del Juez de Veracruz, con todo lo demas que de autos consta, se tuvo presente y ver convino.

De conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal, y por los propios legales fundamentos en que se apoya su respectivo pedimento, y con especialidad en la ley 32, tít. 2º Part. 3ª que cita, se decreta: que el Juez de 1ª instancia del Canton de Veracruz es el competente para seguir conociendo de la demanda que ante él ha promovido D. Francisco Prida, contra la empresa del Ferrocarril sobre daños y perjuicios.

Remítanse las actuaciones al expresado Juez de Veracruz, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes. Remítase copia igual al Juzgado 3º de lo civil de esta Ciudad para su conocimiento. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 22 de 1874.—*Alejo Gomez Eguarte.*

### AMPARO

*Promovido en la Ciudad de San Luis Potosí, ante el Juez de Distrito del Estado del mismo nombre, por los CC. Domingo Gaspar, Nicanor Arevalo, Jesus y Juan Hernandez y Nazario Vazquez, vecinos de la Villa de Mexquitic, contra los actos del Presidente municipal de la misma Villa, en virtud de los cuales se ha requerido de pago á los promoventes por la contribucion de guardia nacional.*

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor dice: que ya tiene manifestado en su parecer del 14 del pasado, las razones y fundamentos legales por que pidió la suspension del cobro de la Contribucion de guardia nacional que se exige á Domingo Gaspar y socios, por el Presidente municipal de la Villa de Mexquitic: y como hasta ahora no tiene motivo para cambiar de opinion, supuesto que las disposiciones á que se ha referido no pueden considerarse, ni pueden tenerse como reglamentarias del artículo 72 de la Constitucion general, es